

TERRITORIOS Y DESARROLLO RURAL EN AMÉRICA LATINA¹

Alejandro Daniel Oviedo

Universidad Nacional de Misiones – Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

oviedoalejandrodaniel@yahoo.com.ar

INTRODUCCIÓN

Los bajos salarios a los trabajadores rurales, y el exiguo **precio** que llega a los productores primarios agrícolas, no son efectos de la fatalidad, ni de leyes inmanentes de mercado, sino consecuencia de intereses económicos y de políticas agrícolas, económicas y comerciales a escala mundial, regional, nacional y provincial. Los recientes cambios en los complejos agroalimentarios en Argentina, ponen de manifiesto ofensivos mecanismos de **penetración del capital global** y nuevas dinámicas regionales de organización y gestión de las cadenas de valor agrícola en los espacios rurales.

El ‘valor’ transferido a los eslabones de industrialización, comercialización y servicios es cada vez mayor que el apropiado por los agricultores; lo que implica que el creciente gasto agregado de los consumidores no llega a los declinantes precios de los productos primarios. La concentración del **comercio agroalimentario** provoca profundas modificaciones en las prácticas productivas agrícolas y en las posibilidades de acceso a los alimentos. Teniendo presente que los procesos analizados son el resultado de una compleja e intrincada trama que se dilata más allá de lo local, destacamos la importancia de analizar las políticas públicas como la resultante de múltiples intereses y relaciones de poder.

La promesa que la “**revolución verde**” acabaría con el hambre a partir de la difusión de tecnologías modernas más eficientes y con mayores rendimientos, resultó una de las mayores falacias del capitalismo². Los fuertes **incrementos en la producción y en los rendimientos** (esgrimidos como indicadores del éxito tecnológico del modelo) significaron una brutal intensificación en la extracción de recursos, en la concentración de la tierra y en la expropiación de millones de campesinos de los medios que les permitían la producción y la reproducción.

La liberalización del comercio y la desregulación de los mercados y las inversiones a expensas de las políticas públicas nacionales, profundizó el proceso de mercantilización de los alimentos, al punto de comprometer la seguridad alimentaria, y la reproducción social de numerosas comunidades rurales. Y si aumentó la riqueza, también favoreció que ésta se concentrara en gigantescos ‘agronegocios’, que en su intermediación comercial y financiera se

¹ Texto presentado como criterio de evaluación final de la signatura “Territorio y Desarrollo Rural en América Latina, ministrada por el profesor Bernardo Mançano Fernandes en el Doctorado en Estudios Sociales Agrarios de la Universidad Nacional de Córdoba, 2010.

² En un nuevo intento de subordinar materialmente la agricultura al capital, la llamada “Revolución Verde” de mitad del siglo pasado busca reemplazar saberes y prácticas de origen campesino por un “paquete tecnológico” basado en la mecanización, el uso de semillas híbridas, e insumos químicos (fertilizantes y pesticidas) insostenibles en términos socioambientales; y omite “en los costos ‘externalidades’ como erosión, contaminación de suelos y aguas, pérdida de biodiversidad, envenenamiento de los trabajadores rurales, exclusión económico-social de pequeños productores no competitivos...” (BARTRA, 2008:108).

apropian del valor generado por los **productores** y del dinero de los **consumidores** que pagan cada vez más para acceder a los alimentos.

Las proposiciones de modernización agropecuaria a partir de la implementación de complejas tecnologías productivistas, y de políticas de desarrollo rural que promoverían la ‘integración’ a mercados dinámicos, ocultaron el carácter concentrador, expropiatorio y excluyente de los agronegocios, intentando invisibilizar la conflictualidad del proceso de territorialización del capital. (FERNANDES, 2008:26)

Aún para funcionarios públicos, investigadores y dirigentes sociales, el pensamiento neoliberal veló las contradicciones productoras de conflictualidad, suplantándola por ideologías de ‘integración’ y adaptación a la lógica de los mercados, con metodologías minuciosamente desarrolladas de ‘participación’ y creación de consensos. La utilización acrítica del concepto de territorio, despojándolo de sus dinámicas de oposición, diferenciación y rupturas, solo contribuye a objetivos de control, despolitización y e imposición del modelo de agronegocios impulsado por instituciones multilaterales (como el BID y el Banco Mundial).

TERRITORIALIZACIÓN DEL DESARROLLO RURAL

El concepto de ‘desarrollo rural sostenible’, y el ‘enfoque territorial’, significaron una serie de aportes novedosos, respecto a concepciones anteriores de desarrollo económico sectorial.

El enfoque territorial llama la atención sobre la necesidad de políticas integrales, multidimensionales, con “mecanismos institucionales que promuevan un sistema participativo y abierto”, y de una redefinición del rol del Estado en “la provisión de bienes públicos, la dirección y la regulación de la economía, y la construcción de la democracia y la institucionalidad rural”. La constatación de las desigualdades sociales y las disparidades territoriales, se explica desde éste enfoque, en las ‘ineficiencias económicas’ que, en el contexto de la globalización “...impiden aprovechar al máximo el potencial de recursos presentes en los territorios rurales...” (IICA, 2003:1,2)

Si bien la definición de desarrollo territorial rural elaborada por Schejtman y Berdegué (2003)³ también amplía las dimensiones involucradas, incorporando la cuestión institucional y la participación de los actores, el eje de la fundamentación teórica gira en torno al “proceso de transformación productiva” “que articule competitivamente la economía del territorio a mercados dinámicos”, planteando la integración al mercado capitalista como la única forma de superar la pobreza⁴.

³ “Definimos el Desarrollo Territorial Rural (DTR) como un proceso de transformación productiva e institucional en un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. La transformación productiva tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente a la economía del territorio a mercados dinámicos. El desarrollo institucional tiene los propósitos de estimular y facilitar la interacción y la concertación de los actores locales entre sí y entre ellos y los agentes externos relevantes y de incrementar las oportunidades para que la población pobre participe del proceso y de sus beneficios” (SCHEJTMAN, 2003,33).

⁴ Entre las críticas a los enfoques tradicionales del desarrollo rural, Schejtman y Berdegué destacan sus limitaciones para incorporar agricultores al mercado laboral, para corregir las fallas o ausencias de mercado en el mundo rural, para

De acuerdo a la sinopsis del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el desarrollo territorial sostenible devendría del aprovechamiento de “ventajas competitivas y comparativas de los diferentes eslabones de la cadena productiva. Las economías de aglomeración y la consolidación de ‘clusters productivos’ (...) articuladas a cadenas de valor eficientes y competitivas del nivel nacional” (IICA, 2003:3).

De forma tal que, la ‘cohesión social y territorial’ planteadas como metas, aparecen más como un supuesto subyacente de un ‘desarrollo armónico’ e integrado, que conjuraría las amenazas de “la integridad de las sociedades y las naciones latinoamericanas”, incluyendo a los actores sociales marginados (familias campesinas, mujeres, comunidades indígenas, juventud, migrantes) y a los territorios rurales (IICA, 2003:4).

A pesar de los intentos explícitos de superar el dualismo tradicional – moderno del desarrollo rural convencional, persisten en esta formulación del ‘enfoque territorial’ conceptos como el de ‘persistencia de brechas regionales y sectoriales’ y el de ‘incidencia de la pobreza rural’ atribuidos a “la dificultad que muestran ciertos sectores para acceder a los beneficios de las políticas públicas”, ‘factores endógenos’ que cargan sobre los sujetos más vulnerables la responsabilidad por su propia ‘marginación’, y soslayan la consecuencias de la expansión del capital sobre la agudización de esas brechas. Coincidimos en la necesidad de ampliar las políticas asistenciales, de formación y desarrollo de capacidades y de fomento productivo, así como en la importancia de que las tareas del desarrollo estén “en manos de las propias comunidades”⁵. Pero entendemos que la ‘cooperación local’ y la asociación libre de organizaciones autónomas, no son suficientes para enfrentar las consecuencias de procesos de diferenciación social, explotación económica y expropiación de recursos que el capitalismo continuamente sigue recreando. Las políticas de reforma agraria, de extensión rural y de microcrédito, pensadas como intervenciones del Estado para corregir ‘distorsiones’ del mercado, están mostrando sus limitaciones para incidir sobre las desigualdades estructurales que se siguen agravando. El incremento de la ‘inseguridad alimentaria de la población rural’⁶ más que un factor endógeno que justifica la adopción del enfoque territorial, es un problema que se viene agravando con la adopción de políticas de desarrollo rural que promueven monocultivos para los mercados dinámicos, la desaparición de los ‘productores ineficientes’ y la difusión de paquetes tecnológicos ‘modernos’ intensivos en capital.

vincular acciones de transformación productiva con la reforma institucional, “para asumir el hecho de que crecientemente son el mercado y los agentes de mercado quienes tienen el peso decisivo en la determinación de las tendencias, oportunidades y restricciones que enfrentan los pobres rurales”. También critican las políticas de asistencia directa hacia los pobres rurales, aduciendo que la agroindustria, los servicios, las empresas medianas y grandes, pueden ser dinamizadoras y difusoras de tecnología (SCHEJTMAN, 2003:5).

⁵ El informe “sobre sistematización de experiencias en cuatro microcuencas atendidas por el Proyecto Prosalafa II (Proyecto de Desarrollo Sostenible para las Zonas Semiáridas de los Estados Falcón y Lara, del Gobierno de Venezuela, con financiación del Programa Regional de FIDA en América Latina y el Caribe, del Banco Interamericano de Desarrollo) analiza los “aprendizajes de los distintos actores involucrados en el proceso de elaboración de planes estratégicos de desarrollo participativos” (FIDAMERICA, 2008) con tal énfasis en la metodología y los procesos de participación locales, que descuida las vinculaciones con actores externos, y la incidencia de la implementación de las políticas gubernamentales.

⁶ “La incidencia de la pobreza rural se ha mantenido constante desde hace tres décadas (de JANVRY Y SADOULET, 2002), en tanto que hoy en día hay más indigentes rurales que hace 20 años (BERDEGUÉ, 1998)” (Cit por SCHEJTMAN, 2003,1).

Las políticas que devienen del Neoliberalismo como discurso dominante, han pretendido despolitizar las diferencias sociales y desactivar los conflictos potenciales, para lo que se han apropiado de conceptos como ‘participación’, o ‘capital social’, utilizándolos de manera apolítica y a-histórica, para explicar la agencia de los actores rurales⁷.

Considerar las medidas para ‘incrementar la producción’, ‘mejorar la eficiencia’ o ‘aumentar la competitividad’ (diferenciación de productos, sellos de calidad, denominación de origen, etc.) exige investigar previamente la sostenibilidad económica, social y ambiental, y los encadenamientos económicos, para evaluar quienes están en condiciones de apropiarse de las ganancias extras de estos nuevos mercados.

En el marco de lo que se ha llamado “nueva ruralidad”, la creencia en políticas neoliberales implementadas masivamente en América Latina desde los años ‘80, condujo a una visión parcializada y acrítica del desarrollo rural. La atención a indicadores asilados de “flexibilidad, incorporación y adaptabilidad de las sociedades rurales a la era globalizadora”, relegaron la problematización de cómo alcanzar los objetivos declamatorio de las políticas de desarrollo rural (“el desarrollo con equidad, la eliminación de la pobreza, el desarrollo humano, el fortalecimiento de la democracia, el énfasis en la sostenibilidad, el aumento del capital social y el desarrollo participativo”). Al eludir el debate de las teorías que dan sustento a dichas políticas, se construyeron al pragmatismo de las agendas de gobernabilidad, convirtiendo el “énfasis en el papel del territorio, la participación, equidad, competitividad, empoderamiento, sostenibilidad” en un “conjunto de orientaciones programáticas y normativas a manera de recetas” que legitiman políticas reformistas, que no modifican las desigualdades económicas, la exclusión social y la crisis política en América Latina (ARIAS, 2006).

En una publicación más reciente de lo Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural RIMISP, y ante la persistencia del incremento de la pobreza rural extrema⁸, y de la desigualdad en el ingreso rural, los autores advierten sobre la “necesidad de revitalizar la agricultura” y de contribuir a “una agenda regional basada en estrategias diferenciadas”. Además de fomentar la inversión y el crecimiento, y de desarrollar los mercados nacionales, plantean la necesidad de políticas para “fortalecer las capacidades de la pequeña y mediana agricultura” y de las organizaciones de productores. Reconociendo las dificultades para entrar en mercados exportadores, y el error de desatender el ‘componente agrícola’ de las estrategias productivas, admiten que la mayor parte de los beneficios serán captados por las élites, si no hay políticas diferenciales que ataquen frontalmente las desigualdades económicas, sociales y políticas, “en el acceso a la tierra y al agua, a los servicios técnicos y financieros, a la infraestructura rural y a la educación y la salud”. (BERDEGUÉ, 2008:4-5).

⁷ “Plantear superar la pobreza a través de promover la participación, el compromiso institucional, y la formación de capital social es loable, sin embargo, sin un análisis más profundo de las desventajas estructurales de los más pobres y de las limitantes de sus agencias, estas aspiraciones no producirán los efectos deseados” (ARIAS, 2006:161)

⁸ “Entre los años 80s y 2002, la pobreza rural aumentó del 59.9 % al 61.8%”, de los cuales casi dos tercios sufren extrema pobreza (CEPAL, 2004. Cit por BERDEGUÉ, 2008:7)

CONFLICTOS EN TORNO A POLÍTICAS ALIMENTARIAS

Es ante los conflictos generados por la agudización de las desigualdades, donde los **Estados nacionales** pueden diferenciarse por sus **políticas de intervención**, para favorecer o para poner límites a la operación irrestricta del mercado.

Algunos gobiernos latinoamericanos, aduciendo el debilitamiento de la capacidad de los Estados frente al avance de la globalización, siguen orientando su rol a meros garantes de las inversiones, aún cuando estas políticas terminen favoreciendo el incremento de las tasas de ganancias de conglomerados transnacionales (como las empresas cerealeras y papeleras) y la concentración de la renta en los tradicionales propietarios.

El desmantelamiento de los mecanismos estatales para regular el mercado, y controlar a la empresas, abrió paso al avance del control monopólico de grandes corporaciones de **agronegocios**⁹, que en el sector alimentario (con bienes muy inflexibles de consumo masivo), implican la concentración del acopio y almacenamiento, la especulación entre precios locales e internacionales, y la consiguiente reducción de los márgenes de seguridad alimentaria.

En **Argentina**, históricamente han confrontado los modelos productivos orientados a las exportaciones y aquellos destinados al consumo interno, y en la cuestión alimentaria con particular agudeza. El retroceso del Estado en la implementación de políticas públicas para el agro agudizó las consecuencias de las medidas económicas de los años 90 en Argentina. Así, a la fijación de un tipo de cambio que se fue tornando desfavorable para la producción de productos exportables, al incremento en las tasas de interés y la presión impositiva, se sumaron la desregulación de los mercados (liquidación de la Junta Nacional de Granos, y de Carnes, entre otros organismos públicos), el incremento de los costos de los servicios concesionados y privatizados (fletes, peajes, puertos, créditos), y la precarización del empleo de los trabajadores rurales (AZCUY AMEGHINO, 2004:231).

Si bien se diseñaron algunas políticas compensatorias, han sido discontinuos y escasos los recursos para sustentar políticas públicas para el sector agrario, en especial aquellas orientadas a **pequeños productores**. Concentradas en la **extensión rural y en la asistencia** con el objetivo primordial de incrementar volúmenes de producción y rendimientos, poco han contribuido a mejorar los ingresos de los productores directos, siendo los intermediarios más concentrados del mercado los que terminan usufructuando el esfuerzo de quienes trabajan la tierra, produciendo una transferencia de ingresos muy regresiva. Más allá de las fluctuaciones de precios en los productos, el creciente peso de la renta y de los intereses financieros, agudizaron los mecanismos

⁹ “Las políticas neoliberales demarcadas por la globalización expandieron las potencialidades de la agricultura capitalista, dándole, incluso, un nuevo nombre: agronegocio. La producción primaria para exportación aumentó con la apertura de mercados, intensificando la territorialización del capital, expropiando el campesinado, aumentando el desempleo, produciendo riquezas, miserias y conflictualidades” (Fernandes, 2008:26)

de **transferencia de excedentes** desde los agricultores hacia los agentes económicos más concentrados¹⁰.

Ante la extraordinaria suba internacional de los precios de los granos, el intento del gobierno nacional por controlar parte de la renta extraordinaria generada por las exportaciones cerealeras a través de la aplicación de retenciones móviles (Res. 125 de 2008) reavivó de manera explosiva los conflictos poniendo de manifiesto un nuevo escenario económico en el agro: crecimiento de la producción agrícola, incremento de la superficie cultivada, utilización más intensiva de capital (semillas híbridas, agroquímicos y maquinarias), incrementos de los rindes por la siembra directa.

Paralelamente al “**éxito del campo**” desaparecieron miles de productores agropecuarios, por quiebra o endeudamiento, a pesar de las luchas y protestas contra los efectos del modelo neoliberal. Es en las cadenas de producción de ‘commodities’ para exportación donde se advierten más abiertamente, las presiones corporativas en nombre de la ‘libertad de mercado’, de la ‘integración competitiva de Argentina a los mercados globales’, y las consecuencias territoriales de una “agricultura sin agricultores”: escalas de producción que obligan a la incorporación de paquetes tecnológicos altamente intensivos en capital y ahorradores de mano de obra, arrendamiento de tierras a ‘pooles de siembra’, desocupación y desarraigo de miles de agricultores y despoblamiento territorial en el campo. La competencia por los recursos productivos, impactan además sobre la capacidad de producir otros alimentos, que, junto con el avance del capital concentrado en los canales de comercialización minorista, están obligando a la población a modificar hábitos alimentarios, o en muchos casos en no poder acceder a los alimentos necesarios¹¹.

Como consecuencia del “éxito del modelo sojero” y de la “expansión forestal-papelera” ávidos de tierra y de agua, comunidades campesinas e indígenas vienen sufriendo desalojos, cercamientos, y presiones de “públicas” y privadas para liberar “recursos improductivos” y ponerlos a disposición de los sectores dinámicos del capital y de los agronegocios¹².

El llamado “conflicto campo-gobierno” a partir de 2008 no sólo puso en el escenario las alianzas del las entidades ruralistas con las fracciones más concentradas del negocio agroexportador, sino que mostró la capacidad de expansión del modelo del agronegocio sojero y de los grupos de siembra a nuevas regiones en Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasil y Paraguay (PALAU, 2007).

¹⁰ “Los grandes terratenientes, los fondos de inversión, los pooles de siembra y los mayores productores capitalistas obtuvieron fuertes beneficios sustentados en los altos niveles de renta del suelo y/o en una rentabilidad mayor a la media, producto de la economía de costos determinada por la amplitud de las escalas productivas que lograron operar” (AZCUY AMEGHINO, 2004:247).

¹¹ “Pensemos que las extensiones anunciadas de los territorios dedicados a la producción de soja, en especial para agrocombustibles, inevitablemente avanzarán sobre zonas fértiles dedicadas a alimentar a la propia población, poniendo en riesgo de esa manera, mucho más que ahora, la capacidad del país de alimentar a los argentinos” (GRR Grupo de Reflexión Rural, 2010. Colonias del Siglo XXI: alimentos, especulación y arrebato territorial).

¹² “El gobierno de Río Negro gestiona inversiones para agronegocios, en este caso de China, con una superficie inicial de 200.000 hectáreas. (...) Es ahora el gobierno de una provincia de la Patagonia el que intenta agregar territorio a esos espacios del capital trasnacional” (GRR Grupo de Reflexión Rural, 2010. Colonias del Siglo XXI: alimentos, especulación y arrebato territorial).

POLÍTICAS ALTERNATIVAS

Recientes experiencias políticas en América Latina vienen insinuando caminos alternativos, con gran protagonismo de los movimientos sociales y/o con una intervención más activa del Estado. Pero no basta con medidas voluntaristas implementadas desde un **gobierno** circunstancial. Las dificultades para superar los regímenes productivos de monocultivo, se advierten en la continuidad de la dependencia de otros países y en los problemas de abastecimiento. La necesidad estratégica de los Estados latinoamericanos de producir más alimentos para **garantizar el abastecimiento** de sus poblaciones, crea la oportunidad de debatir la posibilidad de apoyar y promover modelos de organización de la producción y el trabajo rural alternativos.

El lanzamiento del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal¹³ por parte del gobierno nacional argentino, puede significar un cambio político importante en la medida que se avance desde las expectativas de crecimiento económico, hacia las acciones para lograr equidad y justicia social. El Plan Estratégico es una metodología sistemática de recolección y análisis de información en amplia escala, y de relevamiento de necesidades y expectativas de actores y organizaciones involucradas, pero que sólo puede conducir a la implementación de políticas en la medida que contribuya a modificar las relaciones de poder. La jerarquización de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural, pero sobre eso la constitución del Foro de la Agricultura Familiar (integrado por organizaciones y movimientos campesinos e indígenas), y, son pasos importantes en ese sentido.

La constitución de **grandes empresas estatales** para la producción agrícola (como en el caso de México, o más recientemente Venezuela), tampoco escapó a la lógica de la modernización agrícola y de la búsqueda de grandes volúmenes para exportación, o de la subordinación de la producción agrícola como proveedora de alimentos baratos para el desarrollo de la economía. Mayores recursos públicos volcados al sector, no resuelven por si solos los problemas burocráticos y de eficiencia, ni han modificado sustancialmente las relaciones sociales (ahora los agricultores aparecen como empleados de las empresas del Estado). Sin embargo, las propuestas de colectivización de la tierra, o de cooperativización de la producción agropecuaria, no son recetas automáticas, y aún presentan serias dificultades de implementación, que es dable analizar en cada situación político – económica específica.

Por sus características, el **Programa Fome Zero**, quizá sea el intento de mayor envergadura, de implementar una política pública de seguridad alimentaria y nutricional apoyada en la acción de diversas instituciones del Estado, y de la sociedad civil. El desafío de buscar complementariedad y articulación entre el “Acceso a la alimentación” y el “Fortalecimiento da agricultura familiar”, implica vincular el derecho al “acceso diario y de forma digna a alimentos en

¹³ “está orientado al mayor desarrollo sustentable de la producción agroalimentaria y agroindustrial con el fin de generar una mayor riqueza con valor agregado en origen que beneficie con justicia social, equidad territorial, soberanía y seguridad alimentaria nutricional a todo el pueblo de la Nación Argentina” (PEA 2010 – 2016:11)

cantidad y calidad suficientes para atender a las necesidades nutricionales básicas y al mantenimiento de la salud”, con la potencialidad de que su producción genere inclusión al movilizar el trabajo y los ingresos de pequeños agricultores familiares¹⁴. Sin embargo no se pueden reducir estas políticas a ‘logros’ de los gobiernos, sino que son el resultado, entre otras, de 20 años de luchas del ‘Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra’ (MST) y otros movimientos sociales (campesinos, trabajadores desocupados, agricultores familiares), de ocupaciones, resistencias, asentamientos, organización de la producción, y demandas al Estado (créditos, asistencia técnica, proyectos de alfabetización, escolarización, programas de adquisición de alimentos, etc.).

Frente a los mecanismos de creciente exclusión del capital, o a la excesiva transitoriedad de algunas políticas públicas, ¿es posible un modelo campesino de producción de alimentos? Algunos movimientos sociales lo plantean como una condición de fortalecimiento de los propios territorios, bajo consignas como “tierra campesina es para producir alimentos”, o “territorio libre de monocultivo”, que al mismo tiempo denotan la creación de las condiciones fundamentales para la reproducción de la propia existencia, y la resistencia a subordinarse a las cadenas de producción de ‘commodities’, y al aprovisionamiento en mercados alimentarios externos y concentrados. El derecho a la soberanía alimentaria los pueblos, pensado a nivel de los territorios locales, implica políticas diferentes de producción de alimentos¹⁵ y apoyo a formas de distribución alternativas (agricultura apoyada por la comunidad, precio justo, ferias francas, comercialización directa al consumidor, abastecimiento de programas públicos como los de compra estatal, PAA, etc.).

CONFLICTUALIDAD INVISIBILIZADA

Si bien esporádicamente se agudizan los conflictos y emergen con mayor visibilidad, la **conflictualidad** es un proceso inherente al capitalismo, constantemente alimentado por las contradicciones y desigualdades estructurales. El modelo neoliberal, exacerbó una visión dicotómica subordinando la idea de desarrollo a la dinámica del mercado, con una apología del **agronegocio** como agente casi excluyente del desarrollo, y confinando las visiones alternativas al extremo de criminalizarlas.

Tanto por la explotación de los trabajadores, como por la expoliación de los campesinos, el capital produce simultáneamente concentración de riqueza y expansión de la pobreza, agudizando los enfrentamientos de clases sociales, en su lucha por la territorialización de su existencia. Fernandes (2009) explica que el campesinado y el capital promueven territorios distintos, modelos

¹⁴ “...o governo federal articula políticas sociais com estados e municípios e, com a participação da sociedade, implementa programas e ações que buscam superar a pobreza e, conseqüentemente, as desigualdades de acesso aos alimentos em quantidade e qualidade suficientes, de forma digna, regular e sustentável.” (BRASIL, 2010) Disponível em <<http://www.fomezero.gov.br>> Acesso em: 1 oct 2010.

¹⁵ “Muitos dos novos modelos de agricultura que a humanidade precisará para a transição a formas de agricultura que sejam mais ecológicas, biodiversas, locais, sustentáveis e socialmente justas, estarão arraigadas na racionalidade ecológica da agricultura tradicional em pequena escala, que representa exemplos estabelecidos de formas corretas de agricultura local. Tais sistemas alimentaram a maior parte do mundo durante séculos e seguem alimentando milhões de pessoas em muitas partes do planeta”. (ALTIERI, 2004, cit por ALTIERI, 2010:24).

opuestos de desarrollo, con formas de propiedad y relaciones sociales en contradicción y en permanente disputa¹⁶.

La apropiación de la tierra por el capital en América Latina, ha sido uno de los procesos más violentos y generadores de desigualdad. No sólo en términos de privar de los medios de producción a miles de campesinos, sino al destruir sus vínculos comunitarios con la reproducción de la vida, de la propia y del medio en que existieron por generaciones.

Aún los **productores que permanecen en la tierra y organizan el trabajo familiar**, se ven presionados a adoptar monocultivos para el mercado, que modifican sus prácticas productivas y los obligan a implementar paquetes tecnológicos, aunque no estén formalmente subordinados a una relación salarial. Así, la explotación de clases, se encubre como dependencia del productor a las cosas (agroquímicos, semillas híbridas, técnicas, combustibles).

El análisis de las estrategias de desarrollo rural y de su relación con la expansión del capital, nos remite a la polémica entre los teóricos de la “cuestión agraria” y las conceptualizaciones de un “capitalismo agrario” (FERNANDES, 2008)

Mientras los primeros consideran que la penetración de las relaciones de producción capitalistas en el campo provoca la destrucción del campesinado (resultado de los procesos de diferenciación y proletarización), el ‘capitalismo agrario’ cree que el mercado logrará superar problemas coyunturales, al metamorfosear a los campesinos en productores agrarios integrados al capital¹⁷.

Las políticas neoliberales de los años ‘90 (flexibilización del trabajo, fortalecimiento del mercado con grandes aperturas, disminución de las funciones estratégicas del estado), y sus inmediatas consecuencias (aumento de la pobreza, el desempleo y creación de políticas compensatorias, reflujo de los movimientos sindicales y de los movimientos campesinos), facilitaron la instauración del paradigma del ‘capitalismo agrario’, que a través de profusas publicaciones, financiación de programas, cursos y eventos en distintos países de América Latina, no sólo en los ámbitos gubernamentales, sino también en la academia y en los medios masivos de comunicación, impusieron un modelo de ‘desarrollo rural territorial’ como único proyecto posible.

Con la apertura y la desregulación de mercados, el ‘**agronegocio**’ fue convertido en el protagonista incuestionable de la modernización agropecuaria, acorde con las políticas de liberalización y atracción de inversiones. Avanzó ávidamente concentrando las riquezas, integrando diversos eslabones de la cadena económica, llegando en algunos casos hasta las

¹⁶ “los modelos de desarrollo de **agronegocios**, a partir de monocultivos a gran escala, con trabajo asalariado, muy mecanizado y con la utilización de agrotóxicos y semillas transgénicas. Y al modelo de desarrollo del **campesinado**, que se basa en cultivos varios, en pequeñas escalas, con predominio del trabajo familiar, en su mayoría con baja mecanización, biodiversidad y sin la utilización de agrotóxicos. Esos dos modelos disputan territorios” (FERNANDES, 2009).

¹⁷ “... se integran plenamente a estas estructuras nacionales de mercado, transforman no solo su base técnica, sino, sobre todo, el círculo social en que se reproducen y se metamorfosean en una nueva categoría social: de campesinos, se vuelven agricultores profesionales. Aquello que antes era todo un modo de vida se convierte en una profesión, en una forma de trabajo. El mercado adquiere la fisonomía impersonal con que se presenta a los productores en una sociedad capitalista” (ABRAMOVAY, 1992:126-7 y 131 cit por FERNANDES, 2008).

bases productivas a costa de la expropiación de pequeños productores, intensificando la territorialización del capital hasta límites, y con una vertiginosidad insospechados.

Su fachada productivista (aumento de rindes y de volúmenes de producción) no nos debe ocultar su carácter concentrador y excluyente. Los sujetos del agronegocio ya no se muestran tan preocupados por la apropiación de la tierra (como los latifundistas), sino ocupan eslabones estratégicos del proceso productivo (a través de la imposición de paquetes tecnológicos, del acceso a la financiación, o de la intermediación en la compra y venta de los productos) y buscan incidir en las políticas sectoriales (desregulación, provisión de infraestructura, rebaja o no control impositivo, etc.)¹⁸

TERRITORIALIZACIÓN EN MOVIMIENTO

Esta rápida transformación del capital, nos obliga a repensar el concepto de ‘territorio’, trascendiendo su significación de espacio físico dado, al de espacio socialmente construido, en sus dimensiones económicas, políticas e ideológicas. Fernandes (2008) nos interpela a incorporar la perspectiva histórica y dinámica al hablar de ‘territorios en movimiento’ que “...chocan, son destruidos y recreados por medio de relaciones de poder”¹⁹.

Aunque la ‘cuestión agraria’ se expresa preponderantemente como un conflicto territorial, en su historicidad incorpora diferentes conflictos sociales, por la organización del trabajo y de la producción, por los modelos de industrialización agropecuaria y sus patrones tecnológicos, por las formas de acceso a los mercados.

Pero también incluye la consideración de las políticas públicas que promueven la producción agrícola, regulan la relación campo – ciudad, mejoran la calidad de vida y las condiciones de trabajo rurales, y garantizan el abastecimiento y seguridad alimentaria; políticas relegadas a meras medidas compensatorias por el paradigma del ‘capitalismo agrario’²⁰.

La territorialización del capital al mismo tiempo incorpora y excluye, no solamente a los campesinos, sino también a los propios capitalistas. La consideración de los procesos históricos nos muestran, tanto procesos de destrucción del campesinado por el capital, como de recreación

¹⁸ Como se dio recientemente en el caso de Argentina ante el intento del Poder Ejecutivo de establecer retenciones móviles a la comercialización de granos (Res. 125/08), “los ruralistas” (principalmente los grandes exportadores de soja), mostraron una gran capacidad de presión, a través de sus entidades corporativas, sobre el poder político para mantener sus ingresos extraordinarios en un contexto de precios internacionales en alza.

¹⁹ “Esos territorios en movimiento producen múltiples territorialidades y reterritorializaciones, desterritorializando y reterritorializando relaciones sociales, generando conflictos, negociaciones, acuerdos, manifestaciones, prisiones (a veces muertes), superando y resolviendo problemas, creándolos, recreándolos, desarrollando, por medio de la contradicción, manifestando su conflictualidad” (FERNANDES, 2008:29).

²⁰ “El control político es explicitado por las reglas que rigen el mercado, construidos a partir de la lógica del capital. De ese modo, el mercado se vuelve territorio del capital. Esas reglas son determinadas por ley, a partir de principios que representan intereses de una clase, y son votadas en el Congreso Nacional por la mayor parte de los parlamentarios elegidos democráticamente. Así, los capitalistas, también denominados ruralistas, intentan, siempre que fuera posible, desviar las políticas relativas a la cuestión agraria hacia el mercado”. (FERNANDES, 2008:5).

de relaciones de explotación que los vuelve a “integrar” parcialmente bajo diferentes formas de subordinación²¹.

A pesar de la fuerza hegemónica de las relaciones sociales capitalistas y de su voraz expansión mundializada, la **resistencia** de las organizaciones sociales, recrean territorios heterogéneos, que debemos comprender a partir de la historicidad y espacialización de los conflictos.

Los movimientos sociales (campesinos, comunidades indígenas, organizaciones de productores) son sujetos activos, que recrean estrategias de resistencia, como la lucha por la tierra, la reforma agraria, o la soberanía alimentaria²², construyendo procesos de re-territorialización.

Frente a la aparente irreversibilidad del avance del capital, una y otra vez las organizaciones de trabajadores y de campesinos, se resisten al despojo. Partiendo de fuertes críticas antisistémicas, plantean al mismo tiempo principios y prácticas desde otros modos de vida, con fuertes bases culturales, identitarias y étnicas²³. La Vía Campesina se propone “desarrollar la solidaridad, la unidad en la diversidad entre las organizaciones miembros para promover las relaciones económicas de igualdad, de paridad de género, de justicia social, la preservación y conquista de la tierra, del agua, de las semillas y otros recursos naturales; la soberanía alimentaria; la producción agrícola sostenible y una igualdad basada en la producción a pequeña y mediana escala”²⁴,

Los recientes **cambios políticos** en varios países latinoamericanos, y los acuerdos de integración regional, abren la posibilidad de recuperar herramientas estratégicas de política soberana. Pero a condición de un replanteo profundo de los patrones de comercialización, y de la implementación de planes de fomento de la producción y el abastecimiento interno de alimentos.

Las movilizaciones y luchas políticas de las comunidades indígenas y campesinas²⁵, fuerzan políticas de recampesinización (Bolivia, Brasil), con promoción de formas de organización

²¹ Martins (2010) afirma que la denominada agricultura familiar amplía posibilidades al asumir el modo empresarial y moderno. Pero esa condición no impide, de forma alguna, que el agricultor pague el precio social de subsidiar el consumo de quien trabaja para el gran capital, en la medida en que no se apropia de toda la renta de la tierra y del lucro medio. (p. 43, citado por FERNANDES, 2008:13).

²² “...soberanía alimentar, definida como o direito da cada nação ou região a manter e desenvolver sua capacidade de produzir colheitas de alimentos básicos com a diversidade de cultivos correspondente. O conceito emergente de soberanía alimentar enfatiza o acesso dos agricultores à terra, às sementes e à água, enfocando a autonomia local, os mercados locais, os ciclos locais de consumo e de produção local, a soberanía energética e tecnológica e as redes de agricultor a agricultor” (ALTIERI, 2010:24).

²³ “...la apuesta de la izquierda no puede quedarse en un modelo económico alternativo; debe ser también, y sobre todo, un nuevo orden social que acote las inercias de la máquina mercantil encauzándola en función de necesidades humanas” (BARTRA, 2008:32).

²⁴ “El modelo dominante de las grandes compañías de agro negocios industriales han planeado deliberadamente la dominación de la agricultura y toda la cadena de distribución y producción de la agricultura. Este modelo explota a los trabajadores, concentra el poder económico y político, acaba con los recursos naturales y el medio ambiente y afecta la salud de todos los seres vivos. La Vía Campesina promueve un modelo descentralizado donde la producción, el procesamiento, la distribución y el consumo están bajo el control de las comunidades mismas y no por las compañías transnacionales” (VIA CAMPESINA, 2010). Disponible em: <<http://www.viacampesina.org>> Acesso em: 1 oct 2010.

²⁵ “Os movimentos camponeses e indígenas organizados que se baseiam na agricultura, como o movimento camponês internacional Vía Campesina e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) do Brasil, há muito tempo sustentam que os agricultores precisam da terra para produzir a comida para suas próprias comunidades e seu país. Por esta razão, têm advogado por verdadeiras reformas agrárias para aceder e controlar a terra, a água e a

de la producción que respeten la propiedad comunal de las tierras y las opciones culturales y étnicas de organización social, que puedan ofrecer alternativas a los trabajadores para sustraerlos de los latifundios y de los agronegocios y de las severas condiciones de explotación a que son sometidos.

CONSIDERACIONES FINALES

Las disputas en torno a la conceptualización de territorios, también configuran territorios. Quienes definen las dimensiones involucradas, los criterios de espacialización, los tiempos de transformación, también construyen territorialización, no siendo ajenos a la conflictualidad inherente de los procesos analizados. Intelectuales, funcionarios, dirigentes, pueden quedar atrapados en la fantasía de la ‘visión esencialmente integradora de espacios’ y en la quimera de la ‘conciliación de los actores’ sociales entre sí, o intentar explicitar y analizar críticamente su propio rol en las disputas de poder y de significación de los diferentes territorios en disputa. Tanto los aportes, como las limitaciones de los paradigmas teóricos de la ‘cuestión agraria’ y del ‘capitalismo agrario’ pueden contribuir a enriquecer los debates teóricos soslayados durante la hegemonía del pensamiento único.

La provisión de bienes de consumo a bajo precio para alimentar a los trabajadores (‘bienes salario’) ha modelado las relaciones sociales que sustentan el intercambio desde los orígenes del capitalismo. En dicha transición, la producción de alimentos ha sido considerada una de las tareas del campesinado. La mercantilización²⁶ extrema de la tierra, de las semillas, y de los propios alimentos (del propio núcleo de la vida), de fines del siglo XX, pone nuevamente en cuestión su existencia. ¿Cuáles son las posibilidades reales en los territorios de enfrentar los procesos de concentración y exclusión, exacerbados con la hegemonía del modelo económico neoliberal? ¿Cuál es la potencialidad de formular políticas públicas diferentes, que impulsen la **producción de alimentos** con protagonismo de campesinos, orientadas a garantizar el acceso a la población?

Ante la dispar correlación de fuerzas frente a los agronegocios y la dominación de los mercados, el papel del Estado se vuelve crucial. El análisis crítico de las políticas de desarrollo rural implementadas en los países de América Latina, pueden aportar enfoques comparativos de territorialización de proyectos globales, pero que adquieren características específicas frente a las luchas, a las resistencias y a las territorializaciones alternativas en cada región.

agrobiodiversidade que são de vital importância para que as comunidades sejam capazes de satisfazer as crescentes demandas de comida” (ALTIERI, 2010:29).

²⁶ “los territorios del agronegocio y los de los campesinos y de los indígenas son diferentes, se organizan de diferentes formas, a partir de diferentes relaciones sociales. Así, mientras el agronegocio lo hace para la producción de mercancías, los grupos campesinos lo hacen, primero, para su existencia, para desarrollar las dimensiones de la vida” (FERNANDES, 2009).

Las renovadas luchas sociales en distintos países de América Latina, la expansión de la población campesina, y su re-territorialización, contradicen las reiteradas afirmaciones del ‘fin del campesinado’ y obligan a re-pensar las estrategias de desarrollo rural, y las políticas alimentarias.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALTIERI Miguel A. *Agroecología, agricultura camponesa e soberania alimentar*. Revista NERA – ano 13, nº. 16 – janeiro/junho de 2010.

ARIAS, Eliezer. *Reflexión crítica de la nueva ruralidad en América Latina*. En: Revista ALASRU Nº 3, 2006.

AZCUY AMEGHINO, Eduardo. *De la convertibilidad a la devaluación: el agro pampeano y el modelo neoliberal 1991-2001*. En: AZCUY AMEGHINO, Eduardo. *Trincheras en la Historia, historiografía, marxismo y debates*. Imago Mundi, Bs. As, 2004.

BARTRA, Armando. *El hombre de hierro. Los límites sociales y naturales del capital*. Editorial Itaca – UACM - UAM. México, 2008

BERDEGUÉ, Julio (et al). *Agricultura para el desarrollo: hacia una agenda regional para América Latina*. Santiago: RIMISP. Debates y Temas Rurales nº 12, 2008.

FERNANDES, Bernardo Mançano. Acerca de la tipología de los Territorios In: *Defensa comunitaria del territorio en la zona central de México*. Enfoques teóricos y análisis de experiencias. Carlos A. Rodríguez Wallenius (Coordinador), Xochimilco, Juan Pablos Editores, 2010.

FERNANDES, Bernardo Mançano. Territorio, teoría y política In: *Las configuraciones de los territorios rurales en el siglo XXI*. Ed. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, p. 35-66, 2009.

FERNANDES, Bernardo Mançano. *Cuestión Agraria: conflictualidad y Desarrollo territorial*, Inédito, 2008a.

FERNANDES, Bernardo Mançano. Campesinato e agronegócio na América Latina: a questão agrária atual. São Paulo: Buenos Aires: Expressão Popular, CLACSO p.424, 2008b.

IICA. *Desarrollo rural sostenible: enfoque territorial*. Sinopsis, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura febrero 2003.

FIDAMERICA, Gobierno de Venezuela. *¿Cómo y cuáles han sido los aprendizajes de los distintos actores involucrados en el proceso de elaboración de planes estratégicos de desarrollo participativos?* Fidamerica, 2008.

PALAU, Tomas et al. *Los refugiados del modelo agroexportador: impactos del monocultivo de soja en las comunidades campesinas paraguayas*. Asunción: Base, 2007.

SCHEJTMAN, Alexander; BERDEGUÉ, Julio. *Desarrollo Territorial Rural*. Santiago: RIMISP, 2003.